RECOMENDACIÓN No. 46/ 2016

Síntesis: Funcionaria de Gobernación informa a la CEDH sobre la queja de dos internos, vinculados por el delito de homicidio por haber sido torturados y robados por agentes de la Fiscalía General del Estado.

En base a las indagatorias, este organismo concluyó que no existen evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la integridad y seguridad personal, mediante actos de tortura, así como el derecho a la propiedad, en la modalidad de robo.

Por tal motivo recomendó: **PRIMERA.-** A Usted **Lic. Jorge Enrique González Nicolás, Fiscal General del Estado**, gire sus instrucciones a efecto de que se instaure procedimiento dilucidatorio de responsabilidades, en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos referidos, en el que se tomen en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución y en su caso se impongan las sanciones y lo referente a la reparación del daño, que correspondan.

SEGUNDA.- Se integre debidamente la carpeta de investigación identificada bajo el número “Y” en la que aparecen como víctimas “C” y “D” de una manera inmediata y eficaz a efecto de que se esclarezcan los hechos constitutivos del delito de tortura garantizando en todo momento la seguridad de los impetrantes.

TERCERA.- Se agilicen las diligencias que correspondan en la carpeta de investigación identificada bajo el número “W” en la que aparece como víctima “D” por el delito que corresponda.

CUARTA.- A usted mismo, para que dentro de las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de hechos como los aquí denunciados, a tal efecto se valore la necesidad de la elaboración de un protocolo que permita garantizar la protección de la integridad de las personas desde el momento de su detención hasta la puesta a disposición del Juez de Control.

RECOMENDACIÓN 46/2016

Visitadora Ponente: Lic. Mariel Gutiérrez Armendáriz

Chihuahua, Chih., a 15 de septiembre de 2016

LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE.-

Vistos para resolver el escrito de queja presentada por la licenciada Josefina Flores Jacobo, Subdirectora del Área de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, radicada bajo el número de expediente CM 303/2014, del índice de la oficina de la ciudad de Chihuahua, en contra de actos que consideró violatorios a derechos humanos de “**C**”¹ y “**D**”. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este organismo procede a resolver lo conducente, según el examen de los siguientes:

I.- HECHOS:

1.- Con fecha 14 de junio de 2014, se recibió escrito en vía de correo electrónico por parte de la licenciada Josefina Flores Jacobo en el que se adjunta ficha informativa elaborada por “**B**”, en el cual se hizo del conocimiento de este organismo la existencia de presuntas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de “**C**” y “**D**” en los siguientes términos: (visible en fojas 1 y 2)

“...1. La detención de los indiciados se realizó el día 24 de marzo de 2013 a las 8:50 horas y su puesta a disposición del Ministerio Público se realizó a las 9:00 horas del día 25 de marzo del 2013, es decir 12:10 horas después de su detención, periodo durante el cual los hoy indiciados sostienen que fueron torturados.

2. De acuerdo a nuestra apreciación vemos las siguientes deficiencias y omisiones del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa: a. Al momento de presentarse a declarar los testigos de cargo, el día 26 de marzo de 2013, no se cumplió con el procedimiento legal de identificación de los imputados, ya que al

---

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este organismo considera conveniente guardar la reserva del nombre de la persona afectada, así como otros datos que puedan llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante documento anexo.

momento en que los testigos de cargo realizaban su declaración se les presentaba a los dos detenidos y se les preguntaba si eran ellos los autores del atentado contra el hoy occiso.

b. Existe tres versiones distintas y contradictorias en las declaraciones hechas por los testigos de cargo, en el sentido de la participación, o no, de los imputados en el hecho de haber disparado contra el occiso.

c. Existe contradicción entre lo que afirman los testigos presenciales del atentado, en el sentido de que los hoy indiciados fueron los autores materiales del homicidio al haber disparado contra el occiso y lo que señala el análisis pericial de “Reacción de Radizonato de Sodio realizado por el QBP Luis Enrique Dávila Cordero, el 26 de marzo de 2013, en el sentido de que ninguno de los hoy imputados presentó en sus manos residuos de Plomo y Bario, es decir que no realizaron ningún disparo.

d. Casualmente y sin justificación alguna, el análisis pericial de “Reacción de Radizonato de Sodio realizado por el QBP Luis Enrique Dávila Cordero, el 26 de marzo de 2013, fue omitido en la documentación incorporada en la consignación del expediente ante el Juez correspondiente.

e. Asimismo, existen contradicciones entre lo manifestado en el parte policial y lo declarado tanto por los testigos de cargo como por los testigos de descargo, sobre la forma en la que se realizó la detención de los indiciados.

f. Todos estos elementos son suficientes para dudar de la veracidad de las declaraciones de los testigos de cargo, como de los agentes policiacos involucrados, así como de la imparcialidad con que debería conducirse el C. Agente del Ministerio Público.

3. De acuerdo a nuestra apreciación vemos las siguientes deficiencias y omisiones de la Juez responsable de la sustanciación del proceso en contra de los imputados.

a. Existe tres versiones distintas y contradictorias en las declaraciones hechas por los testigos de cargo, sin embargo la Juez en el Auto de Vinculación a Proceso presenta dichos testimonios como si coincidieran cabalmente.

b. De manera inexplicable se ha permitido que los policías de la Policía Estatal Única, que de acuerdo al parte fueron los que detuvieron a los indiciados, no se presenten a las audiencias establecidas para los careos con los imputados y la Juez no aplique las multas u otras medidas que obliguen a los agentes a cumplir con el mandato judicial e incluso suponiendo una audiencia debido a que dichos agentes “no iban preparados”. Lo anterior con la finalidad de solicitarle tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se le otorgue la atención que el caso amerita” [sic].

2.- El día 06 de agosto de 2014, el Licenciado Sergio Alberto Márquez de la Rosa, Visitador Adscrito al Área de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se entrevistó con “**C**” y “**D**” quienes

manifestaron su deseo de presentar queja ante este organismo en los siguientes términos: (visible en fojas 8 y 9)

“... me entrevisté con los internos “D” y “C”, de veintinueve y cuarenta y cinco años de edad originarios de Sinaloa, manifestando el primero de los mencionados: Que el día veinticuatro de marzo del dos mil trece, como a las ocho de la noche aproximadamente, nos encontrábamos “C” y yo en el domicilio “F” de esta Ciudad de Chihuahua, cuando llegó la Policía Estatal y forzó la cerradura de la puerta y se introdujeron al domicilio y me dijeron: “saca el cuete” yo les dije que no sabía de qué me hablaban y uno de ellos me dio una descarga eléctrica en el cuello con un aparato de esos de defensa personal por lo que me derrumbé y caí de rodillas, me comenzaron a dar patadas en el estómago y también esculcaron toda la casa, después nos subieron a una unidad a “C” y a mí y nos llevaron al C4, ahí nos metieron a una celda, a mí me vendaron los ojos, me amenazaron con que me iban a cortar la cabeza mientras me preguntaban que si pertenecía a un grupo delictivo, me golpeaban en el estómago y en la nuca, después me volvieron a llevar a la celda y a “C” lo golpeaban con la mano en la cabeza y le daban descargas eléctricas en la espalda y en el cuello y lo siguieron golpeando durante mucho tiempo, al día siguiente como a las tres de la tarde nos llevaron a las instalaciones de la Fiscalía zona Centro, ahí nos enteramos que nos acusaban de un homicidio, hasta el veintisiete de marzo nos llevaron al Cereso Estatal número uno, donde hemos permanecido hasta la fecha, es mi deseo interponer queja ante este organismo derecho humanista para que se investiguen los hechos y se haga la recomendación correspondiente, es todo lo que deseo manifestar”. Por otra parte, el detenido “C” manifestó: Que el día veinticuatro de marzo de dos mil catorce, fui detenido con “D” en el domicilio que le mencionó por agentes de la Policía Estatal trasladándonos en una patrulla al C4 donde fui golpeado y recibí descargas eléctricas en la región de la espalda acusándome de que había cometido un homicidio y fue hasta el día siguiente cuando nos trasladaron al Cereso donde hemos permanecido detenidos por lo que es mi deseo que se realice una investigación por derechos humanos mediante la queja respectiva, siendo todo lo que deseo manifestar...” [sic].

3.- El día 03 de octubre de 2014, se recibió el informe requerido al Lic. Fausto Javier Tagle Lachica, Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y ofendidos del Delito mediante el oficio FEAVOD/UDH/CEDH/1856/2014 del tenor literal siguiente: (visible en fojas 16 y 17)

“...a consecuencia de la queja diligenciada bajo el número de expediente CM 303/14, presentada por “C” y “D”, por lo cual le informo lo siguiente: I.- Peticiones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. a. Básicamente solicita lo siguiente: 1.- Remita copia certificada de los informes médicos de lesiones relativos a los quejosos; 2.- Copia certificada de los informes levantados por los agentes captores, concernientes a la detención de informe “C” y “D”. II.- Planteamientos de la persona quejosa. b. Manifiestan las personas quejosas que su detención se llevó a cabo el día 24 de marzo del año 2013, y que en el tiempo entre su detención y su puesta a disposición con el ministerio público, fueron agredidos físicamente. III.

Actuación oficial y conclusiones. De conformidad con la información recibida de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, así como el diverso oficio FEEPYMJ/DJYN/1521/2014, signado por el Jefe del departamento Jurídico y de Normatividad, de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con lo anterior espero dar cumplimiento a su solicitud. IV Peticiones conforme a derecho. Que se determine lo que conforme a derecho proceda, ya que hay suficientes elementos para que – con fundamento en lo estatuido en el art. 43° de la LCEDH- sea procedente que se dicte un acuerdo de no responsabilidad en el expediente CM 303/14, y en base a lo previsto en el art. 76° de Ricedh se concluya con el expediente, por no tratarse de violaciones a Derechos Humanos...” [sic].

II. - EVIDENCIAS:

4.- Conforme al acuerdo de radicación de fecha 14 de junio de 2014, se recibió escrito mediante correo electrónico el día 12 de junio de 2014, mismo que fue remitido por la licenciada Josefina Flores Jacobo, Subdirectora del Área de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, el cual quedó debidamente transcrito en el punto uno de la presente resolución (fojas 1 a 3).

5.- Acta circunstanciada de fecha 06 agosto de 2014, en la cual el licenciado Sergio Alberto Márquez de la Rosa, Visitador de este Organismo, sostuvo entrevista con “**C**” y “**D**”, quienes expresaron las circunstancias que vivieron al momento en que fueron detenidos, acta que ha quedado transcrita íntegramente en el punto dos de la presente resolución (visible en fojas 8 y 9).

6.- Solicitud de informes al Lic. Fausto Javier Tagle Lachica, Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de fecha 12 de agosto de 2014 (visible en fojas 10 y 11)

7.- Oficio CM 207/2014 dirigido al Licenciado Sergio Almaraz Ortiz, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro mediante el cual se hicieron de su conocimiento hechos probablemente constitutivos de delito (visible en foja 13).

8.- Informe de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito recibido en este organismo en fecha 03 de octubre de 2014 el cual fue debidamente transcrito en el párrafo 3 de la presente resolución (visible en fojas 16 y 17).

En dicho informe se adjuntó la siguiente documentación en copia simple: (visible en fojas 18 a 32).

8.1.- Oficio DG-PEU/JUR/627/2013 relativo a la puesta a disposición de personas detenidas (visible en fojas 18 y 19).

8.2.- Puesta a disposición N° 677/2013 signada por los elementos de la Policía Estatal Única, División Preventiva, agentes Pablo Adrián Gutiérrez Gutiérrez, Manuel Domínguez Mendoza, sub oficial Carlos Cruz Rangel, elementos de la Dirección de seguridad Pública Municipal de Chihuahua, agentes Adán Rodríguez Delgado y Víctor Hugo Herrera Rocha (visible en fojas 20 a 24).

8.3.- Certificado médico suscrito por el Médico Cirujano Dr. José Luis Priego Modesto adscrito a la Policía Estatal Única, en el cual se asienta que revisó a “D” en fecha 24 de marzo de 2013 (visible en foja 25).

8.4.- Certificado médico suscrito por el Médico Cirujano Dr. José Luis Priego Modesto adscrito a la Policía Estatal Única, en el cual se asienta que revisó a “C” en fecha 24 de marzo de 2013 (visible en foja 26).

8.5.- Oficio No. DCRE/2494/2014 signado por el Licenciado Valentín Martínez Zazueta dirigido al Licenciado Raúl S. Ferraez Arreola, Jefe del Departamento Jurídico y de Normatividad de la F. E. E. P. y M. J. (foja 28).

8.6.- Oficio No. DCRE/2495/2014 signado por el Licenciado Valentín Martínez Zazueta, Subdirector del CERESO ESTATAL No. 1 dirigido al C. Leonardo Olivas en carácter de Inspector Jefe de Guardia del Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 (foja 29).

8.7.- Copia simple del certificado médico de ingreso al Centro de Reinserción Social Estatal No. 1, emitido en fecha 26 de marzo de 2013 por el Dr. Samuel Fco. Villa de la Cruz, médico adscrito a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, mediante el cual hizo constar que le practicó una revisión médica a “D”, precisando el especialista en la salud que el explorado se encontraba sano (foja 30).

8.8.- Copia simple del certificado médico de ingreso al Centro de Reinserción Social Estatal No. 1, emitido en fecha 26 de marzo de 2013 por el Dr. Samuel Fco. Villa de la Cruz adscrito a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, mediante el cual hizo constar que le practicó una revisión médica a “C”, precisando el especialista en la salud que el explorado presentaba los siguientes datos: *“En la región dorsal del tórax hacía el tercio superior presenta aprox. 120 zonas de quemaduras de forma circular con ampulla y excoriación a nivel central que miden aprox. 0.2 centímetros”* [sic] (foja 31).

9.- Acta circunstanciada de fecha 04 de diciembre de 2014, elaborada por el Licenciado César Salomón Márquez Chavira, Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la que da fe de que se presentó ante estas oficinas el Licenciado “T”, defensor particular de “C” y “D” para exhibir copia simple de la denuncia interpuesta por “U”, madre de “D” ante la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Zona Centro, la cual solicitó fuera agregada al expediente, en relación al robo y uso ilegal de dos tarjetas de crédito de las instituciones de banca múltiple Bancomer, S.A. de C.V. y Banamex S.A. de C.V., mismas que se encontraban dentro de las pertenencias de este último

al momento de su detención por elementos de la Policía Estatal Única (visible en foja 34).

9.1.- Copia simple de querrela de fecha 25 de noviembre de 2013 presentada ante la Licenciada Lizeth Adriana Carrillo Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado. La querrela fue presentada por “**U**”, misma que quedó identificada bajo el número único de caso “**W**” de la cual se desprenden los siguientes hechos: (visible en fojas 35 a 42). “...*ME ENTREGARON LOS ESTADOS DE CUENTA A NOMBRE DE MI HIJO Y FUE CUANDO ME DI CUENTA DE QUE LE ESTABAN HACIENDO CARGOS A SUS DOS TARJETAS, ESTADOS DE CUENTA QUE EN ESTE ACTO EXHIBO EN ORIGINAL Y SOLICITO ME SEAN DEVUELTOS PREVIA COPIA QUE DE LOS MISMOS SE DEJE EN EL EXPEDIENTE...QUIERO MANIFESTAR QUE MI HIJO NO PUDO HACER TALES DISPOSICIONES PORQUE EL FUE DETENIDO DESDE EL DÍA 24 DE MARZO DE 2013 EN ESTA CIUDAD Y DESDE ENTONCES SIGUE PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL CERESO, Y TODOS ESTOS CARGOS FUERON HECHOS EN FECHA POSTERIOR A LA DETENCIÓN DE MI HIJO, LO QUE ME HACE PENSAR QUE LAS ESTÁN USANDO LOS POLICÍAS QUE LO DETUVIERON O EL PERSONAL QUE RECIBIÓ SUS PERTENENCIAS...*” [sic].

10.- Escrito recibido en fecha 29 de diciembre de 2014 ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mediante el cual los impetrantes “**C**” y “**D**” manifiestan su inconformidad con el informe de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito refiriendo lo siguiente:

“... fuimos torturados durante el tiempo que estuvimos en poder de agentes pertenecientes a la Policía Estatal Única, siendo desde el momento de nuestra detención, aproximadamente a las 19:00 horas del día 24 de marzo de 2013 hasta el día 25 de marzo del 2013 sumando más de 12 horas en poder de dicha autoridad hasta el momento en que fuimos puestos a disposición del Ministerio Público...” [sic] (visible en fojas 44 a 49).

11.- Oficio CHI-MGA 059/2015 de solicitud de información en vía de colaboración al Mtro. César Augusto Peniche Espejel, Delegado de la Procuraduría General de la República de Chihuahua a efecto de que remitiera a este organismo copia certificada de los dictámenes médicos practicados a “**C**” y “**D**”, los cuales según datos proporcionados por los quejosos, obran en averiguación previa ante dicha autoridad (visible en foja 59).

12.- Informes de valoraciones psicológicas realizadas por el Licenciado Fabián Octavio Chávez Parra, Psicólogo adscrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aplicados a los impetrantes de fechas 19 de febrero de 2015, de las cuales derivaron los siguientes resultados de diagnóstico clínico, conclusiones y recomendaciones: (visibles en fojas 55 a 60 y 61 a 65 respectivamente).

“En base a la entrevista practicada, las pruebas psicológicas aplicadas y al análisis de la declaración del entrevistado y en base a la relatoría de los hechos, los rasgos

fisionómicos que muestra el entrevistado, concluyo que el estado emocional de “C” es estable, ya que no hay indicios que muestren que el entrevistado se encuentre afectado por el supuesto proceso de malos tratos que el mismo refiere que vivió al momento de su detención”.

“En base a la entrevista practicada, las pruebas psicológicas aplicadas y al análisis de la declaración del entrevistado y en base a la relatoría de los hechos, los rasgos fisionómicos que muestra el entrevistado, concluyo que el estado emocional de “D” es estable, ya que no hay indicios que muestren que el entrevistado se encuentre afectado por el supuesto proceso de malos tratos que el mismo refiere que vivió al momento de su detención” [sic].

13.- Oficio número 867/2015 signado por el Licenciado José Luis Pedraza Nube, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo del Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría General de la República, mediante el cual remite copia certificada de los dictámenes médicos practicados a “D” y “C” dentro de la averiguación previa “X”, los cuales constaron en un total de diez fojas útiles (visible en fojas 69 a 80).

13.1.- Copia certificada de dictamen médico de integridad física y toxicomanía de fecha 26 de marzo de 2013, emitido por el Dr. Cuitlahuac Ortiz Osorio, perito médico oficial de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, quien realizó una revisión médico legal a “C” (visible en foja 71).

13.2.- Copia certificada de dictamen médico de integridad física y toxicomanía de fecha 26 de marzo de 2013, emitido por el Dr. Cuitlahuac Ortiz Osorio, perito médico oficial de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, quien realizó una revisión médico legal a “D” (visible en foja 76)

14.- Oficio No. CHI-MGA 057/2015 dirigido al Licenciado Fausto Javier Tagle Lachica, Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito mediante el cual se le requirió información adicional en relación al estado que guarda la carpeta de investigación “W”, respecto a si se les practicó examen de parafina a “C” y “D” así como el resultado que haya derivado de la misma (visible en fojas 86 y 87).

15.- Informe complementario por parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito bajo el oficio FEAVOD/UDH/CEDH/2290 de fecha 18 de diciembre de 2015 del que se desprende la siguiente información: (visible en fojas 89 y 90).

“...a) En fecha 25 de noviembre del año 2013, se dio inicio a la carpeta de investigación “W” incoada por la querrela presentada por “U” en calidad de apoderada legal de “D” por el delito de abuso de confianza y/o lo que resulte en contra de quienes resulten responsables. b) Se giraron diversos oficios a fin de realizar diligencias consistentes en asegurar las cámaras de video de los

establecimientos donde se realizaron los cargos. c) Se realizaron diligencias con la finalidad de determinar la identidad de las personas involucradas. d) A consideración del Agente del Ministerio Público y de acuerdo a los hechos señalados por la querellante, se pudiera acreditar el delito de robo, descrito en el numeral 208 y sancionado en el numeral 212 fracción XI del Código Penal vigente y no así el delito de fraude. e) Por lo que actualmente la presente carpeta de investigación se encuentra en trámite.

Atendiendo a la petición segunda en relación a la manifestación de la señora “U” en el sentido de que el día que fueron detenidos “D” y “C”, les fue practicado examen de “parafina” para detectar si los mismos realizaron disparos de arma de fuego, me permito hacer de su conocimiento que en la actualidad existen diversos tipos de pruebas con las que se puede determinar si una persona disparó un arma de fuego, como por ejemplo: la prueba de la Parafina, Harrison Gilroy, la Espectrometría de ICP-Masas, activación de Neutrones, Espectroscopio de AA, Microscopio Electrónico de Bario y la Reacción de Radizonato de Sodio. Siendo esta última la que se utiliza en el estado de Chihuahua.

Para dar cumplimiento a la petición tercera, adjunto copia del dictamen pericial en materia de química forense consistente en reacción de radizonato de sodio, practicado a “D” y “C” por el perito químico adscrito a la Dirección de Servicios Periciales en fecha 26 de marzo de 2013” [sic].

16.- Copia simple del examen de reacción de radizonato de sodio practicado a “C” y “D” en los que se obtuvo un resultado negativo para ambos por lo que respecta a la presencia de Plomo y Bario de fecha 26 de marzo de 2013 (visible en foja 91).

17.- Informe complementario por parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito bajo el oficio FEAVOD/UDH/CEDH/1046 de fecha 11 de mayo de 2016 del que se desprende la siguiente información: (visible en foja 94)

“...me permito informarle que el día 03 de mayo de 2014 se apertura la carpeta de investigación “Y” por el delito de Tortura en el cual aparecen como víctimas los quejosos en mención, asimismo dentro de las diligencias existentes en dicha carpeta, obra entrevista realizada por personal de Policía Estatal Única, en la cual las víctimas manifestaron que no era su deseo rendir entrevista con relación a los hechos descritos en la queja, ni someterse a los exámenes relacionados con el Protocolo de Estambul” [sic].

18.- Acuerdo de cierre de la etapa de investigación de fecha 13 de mayo de 2016 (visible en foja 96).

III. - C O N S I D E R A C I O N E S:

19.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto, según lo dispuesto por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los

artículos 1º, 3º, y 6º fracción II inciso A), así como el artículo 42 de la Ley de la materia y por los artículos 12 y 78 del Reglamento Interno correspondiente.

20.- De acuerdo con los artículos 39 y 42 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no derechos humanos, valorando todos los indicios en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y experiencia, con estricto apego a la legalidad que demanda nuestra Carta Magna en su artículo 16, para una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la presente queja.

21.- Los detenidos “**C**” y “**D**” manifestaron haber sido víctimas de agresiones físicas, mismas que por su descripción pudiesen consistir en tortura y que tales agresiones físicas son atribuibles a elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado, a partir del momento en que se realizó su detención en fecha 24 de marzo de 2014.

22.- Con relación a dichas agresiones físicas “**C**” refirió que fue detenido por agentes de la policía estatal, siendo trasladado en una patrulla al C4 donde fue golpeado además de haber recibido descargas eléctricas en la región de la espalda acusándole de que había cometido un homicidio. Por otra parte, “**D**” manifestó que uno de los agentes aprehensores, le dio una descarga eléctrica en el cuello con un aparato de “*defensa personal*” cayendo al piso, continúa narrando que le dieron patadas en el estómago para posteriormente subirlo a una unidad junto con “**C**” para trasladarlos al C4, que ahí los metieron a una celda y a él particularmente, le vendaron los ojos y lo amenazaron diciéndole que le “*iban a cortar la cabeza*” mientras le preguntaban si pertenecía a algún grupo delictivo, finalmente agrega que continuó recibiendo golpes en el estómago y en la nuca para ser trasladado de nueva cuenta a la celda.

23.- De la narrativa de hechos que realiza “**D**” ante el Licenciado Sergio Alberto Márquez de la Rosa, Visitador Adscrito a Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social, se desprende que el impetrante corrobora el dicho de “**C**” al mencionar lo siguiente: “*a “C” lo golpeaban con la mano en la cabeza y le daban descargas eléctricas en la espalda y en el cuello y lo siguieron golpeando durante mucho tiempo*”.

24.- Teniendo entonces de que lo presentado por la autoridad, que fue identificado en el punto siete de la parte de evidencias de la presente resolución, se tiene parte informativo elaborado por los elementos de la Policía Estatal Única, División Preventiva, agentes Pablo Adrián Gutiérrez Gutiérrez, Manuel Domínguez Mendoza, sub oficial Carlos Cruz Rangel, elementos de la Dirección de seguridad Pública Municipal de Chihuahua, agentes Adán Rodríguez Delgado y Víctor Hugo Herrera Rocha, quienes precisan: “*...íbamos tras las otras dos de las personas que descendieron del vehículo pick up, Toyota, color blanco modelo aproximado de*

1998, con placas de circulación del estado de Jalisco placas “S”, y los cuales ingresaron al domicilio marcado con el número “Q”, cabe hacer mención de que nos percatamos que uno de los sujetos antes citado traía entre sus manos, al parecer un arma de fuego, penetrando los suscritos al domicilio antes citado dado los hechos antes narrados, viendo a una persona del sexo masculino que efectivamente traía en la mano derecha un arma de fuego, color negra, con cachas de color café, el cual vestía un pantalón de mezclilla color negro, sudadera verde, huaraches piteado, quien dijo responder al nombre de “C” de 50 años de edad, quien de forma voluntaria dejó el arma de fuego sobre la mesa de su casa y en la misma habitación se aseguró al otro sujeto, quien dijo llamarse “D”, de 28 años de edad, quien vestía pantalón color gris de mezclilla y sudadera color negra y los cuales se vieron superados por los elementos, indicándonos el primero de los citados que no quería pedos, dejando un arma de fuego sobre la mesa y manifestándonos que si venían por la droga se encontraba en la recámara y apuntó hacia la derecha, por lo que se revisaron corporalmente a las personas antes citadas, quien dijo llamarse “C”, el cual traía colgada una bolsa de piel, tipo mariconera con el logotipo de Armani, encontrando en su interior 10 envoltorios plásticos transparentes que en su interior contiene una masa negruzca, dura con las características propias de la heroína, 15 envoltorios plásticos que contiene en su interior polvo blanco con las características propias de la cocaína, de igual forma se encontraron 8 tiros útiles calibre .45, al revisar a quien dijo llamarse “D”, se le encontró en la bolsa delantera del pantalón de lado derecho, 5 envoltorios plásticos transparentes que en su interior contiene una masa negruzca, dura con las características propias de la heroína, por lo que se aseguró a las personas, procediendo a leerles sus derechos siendo las 20: 50 hrs. Informándoles que quedaban formalmente detenidos por el delito de homicidio en grado de tentativa, lesiones dolosas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y Fuerza Aérea así como por posesión de arma de droga y/o enervantes...” [sic] (foja 20 a 25).

25.- Informando también en dicho parte, que se trasladaron a las instalaciones de la Policía Estatal Única, División Preventiva, ubicado en el C4, para llevar a cabo la papelería correspondiente y ser consignado ante la autoridad responsable. De manera tal, que se tiene acreditado el hecho de que “C” y “D”, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Única y Agentes de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua.

26.- Es importante mencionar, que los impetrantes refieren que desde el momento en que fueron detenidos, los agentes captadores ejercieron ilegalmente la fuerza para llevar a cabo el arresto, sin embargo, de acuerdo los con certificados médicos proporcionados por la autoridad en copia simple, se especifica que “C” y “D”, fueron valorados entre las 21:30 y 21:40 horas del día 24 de marzo de 2014, por el doctor José Luis Priego Modesto, Médico de la División Preventiva de la Policía Estatal Única, certificados de los que se desprende que los detenidos no presentaban lesiones físicas aparentes en esos momentos (fojas 24 y 26).

27.- Bajo esta circunstancia, y al estar en el entendido de que los impetrantes continuaron bajo la custodia y vigilancia de los policías estatales, aunado a que “C” y “D” señalan, como responsable de las agresiones sufridas a los elementos de la Policía Estatal Única, este Organismo determina continuar conociendo únicamente por los hechos aludidos en contra de los servidores públicos del Estado.

28.- Quedando entonces confirmado por la autoridad el hecho de la detención de los aquí quejosos y que los mismos fueron llevados a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, conocido como C-4, en primer término, se procederá a analizar si en el caso bajo análisis existió violación al derecho a la integridad y seguridad personal en perjuicio de los impetrantes en la modalidad de tortura y posteriormente se analizarán algunas otras cuestiones que tienen relación con el hecho principal.

29.- Como quedó antes mencionado y precisado en los puntos 8.3 y 8.4 de la presente resolución, de los certificados médicos expedidos por personal adscrito a Policía Estatal Única en el que asentó con fecha 24 de marzo de 2013, que tanto “C” como “D” clínicamente no presentaron lesiones físicas en ese momento.

30.- De conformidad a lo manifestado por los detenidos, y en atención a que se duelen que se atentó en contra de su integridad física, se recabaron certificados médicos de ingreso al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, de fechas 26 de marzo de 2013, descritos íntegramente en las evidencias números 8.7 y 8.8, “D” se refiere sano, en tanto que “C” presentó en la región dorso del tórax hacia el tercio superior, aproximadamente 120 zonas de quemaduras de forma circular con ámpula y escoriación a nivel central con una medida de 0.2 centímetros.

31.- Se cuenta además con los certificados médicos de integridad física y toxicomanía realizadas a “C” y “D” a las 13:00 y 14:00 del día 26 de marzo de dos mil 2013, por doctor Cuitlahuac Ortiz Osorio, Perito Médico Oficial de la Procuraduría General de la Republica, evidencias contenidas en los párrafos 12.1 y 12.2 en los que se asentó que los dos detenidos presentaron lesiones al momento de la revisión física; por lo que respecta a “C” se desprende lo siguiente: *“A la exploración física: Al momento de la revisión presenta: equimosis de color rojo vinoso con medidas de tres por seis punto cinco centímetros ubicadas en región esternal; siete escoriaciones de forma irregular con medidas la mayor de uno punto cinco por cero punto cinco centímetros y la menor con medidas de cero punto dos por cero punto un centímetros ubicadas en la región submandibular derecha; escoriación de forma irregular con medidas de cero punto cinco por cero punto dos centímetros ubicada en región del flanco izquierdo; escoriación de forma irregular con medidas de cero punto cinco por cero punto dos centímetros ubicada en la cara anterior del hombro izquierdo; equimosis de color rojo vinoso de forma irregular con medidas de uno por un centímetro en región pectoral izquierda; múltiples escoriaciones de forma puntiforme ubicadas en ambas regiones escapulares y región interescapular la mayor con medidas de uno punto cinco por cero punto cinco centímetros y la menor con medidas de cero punto dos por cero punto un centímetro; equimosis de color verdoso con medidas de cinco por dos centímetros*

ubicadas en flanco izquierdo del abdomen; dos escoriaciones de forma irregular con medidas ambas de cero punto cuatro por cero punto dos centímetros ubicadas en tercio proximal cara interna del muslo derecho. En cuanto a “D” se desprende la siguiente información: A la exploración física: Al momento de la revisión presenta: tres escoriaciones de forma irregular con medidas la mayor de cinco por cero punto dos centímetros y la menor con medidas de tres por cero punto un centímetro ubicadas en hipocondrio derecho; equimosis de color rojo vinoso de forma irregular con medidas de seis por cuatro centímetros ubicada en epigastrio; escoriación de forma irregular con medidas de cero punto siete por tres centímetros ubicadas en tercio medio cara anterior de pierna izquierda” [sic] (fojas 71 a 73 y 75 a 78).

32.- Cabe destacar que “C”, refiere que recibió descargas eléctricas en la región de la espalda, hecho que es plenamente coincidente con el resultado de los exámenes médicos practicados tanto en la PGR como al momento de ingresar al CERESO Estatal No. 1 en el que se asentó: *“EN LA REGIÓN DORSO DEL TÓRAX HACIA EL TERCIO SUPERIOR PRESENTA APROX. 120 ZONAS DE QUEMADURAS DE FORMA CIRCULAR CON ÁMPULA Y ESCORIACIÓN A NIVEL CENTRAL QUE MIDEN APROX. 0.2 CENTÍMETROS”* [sic] (foja 31).

33.- Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido el dicho de los impetrantes, en el sentido, que aproximadamente doce horas después de la detención fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En este sentido, se cuenta con copia simple del oficio DG-PEU/JUR/627/2013, proporcionada por la autoridad, documento firmado por el licenciado Oscar Ernesto Domínguez Ordoñez, del Departamento Jurídico de la dirección General de la Policía Estatal Única, con el cual pone a disposición a “C” y “D”, ante el agente del Ministerio Público, documento que tiene como fecha de recibido a las 08:00 horas del día 25 de marzo de 2013 (foja 18), con lo cual quedó plenamente acreditado el hecho de que los detenidos no fueron puestos a disposición de forma inmediata ante el representante social.

34.- Las huellas de violencia plenamente evidenciadas, concuerdan y por tanto pueden resultar consecuencia lógica y directa, de la violación a la integridad y seguridad personal, en perjuicio de “C” y “D”, por las acciones imputadas a los elementos de la Policía Estatal Única, quienes sin causa legítima y valiéndose de sus atribuciones causaron dolor y sufrimientos graves y en consecuencia produciendo afectaciones físicas a los detenidos.

35.- De las evidencias antes descritas, son suficientes para engendrar certeza de que las lesiones que presentaban los detenidos, fueron realizadas durante el tiempo en que estuvieron a disposición de los elementos de la Policía Estatal Única. Lo anterior en el sentido que los impetrantes refieren en su escrito inicial de queja que al momento de su detención y el tiempo que permanecieron bajo su custodia, dichos elementos hicieron uso ilegal de la fuerza, reforzando además este razonamiento, en el hecho de que los propios agentes captadores mencionaron en el parte informativo que los impetrantes no pusieron resistencia durante la detención.

36.- Es importante mencionar que la queja fue presentada en fecha 06 de agosto de 2014 habiendo ya transcurrido un plazo considerable con relación a los hechos que se suscitaron el 24 de marzo de 2013; por lo que con la finalidad de robustecer la investigación, se solicitó al Licenciado Fabián Octavio Chávez Parra, Psicólogo adscrito al presente organismo, realizara valoraciones psicológicas a los quejosos del que se obtuvo como resultado que el estado emocional de “C” y “D” es estable, ya que no hay indicios que muestren que se encuentren afectados por los hechos denunciados.

37.- Al respecto, se tiene que las valoraciones psicológicas negativas en sí, no deben ser determinantes para considerar que no haya existido tortura, sino que únicamente son una evidencia más que debe tomarse en cuenta al momento de resolver el fondo del asunto, sin dejar de lado aquellas que nos indiquen la existencia de violaciones a los derechos humanos de gravedad como en el presente caso.

38.- Por lo que tomando a consideración los párrafos que anteceden, este organismo advierte que existió violación al derecho a la integridad y seguridad personal en perjuicio de “C” y “D” en la modalidad de tortura, por parte de agentes adscritos a la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado, lo que llevará a pronunciarse más adelante en el apartado de recomendaciones de la presente resolución.

39.- Al respecto, el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece que: *“...se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica...”; al igual, el punto 6 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión determina: “Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.*

40.- En este mismo sentido, el artículo 3 de la Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua, dispone: *“Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos, con el fin de:...II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido...”.*

41.- En las mismas circunstancias, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 7 que nadie será sometido a torturas ni a penas

o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en ese mismo orden de ideas, prevé en su artículo 10.1 que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. A lo anterior hace referencia en el ámbito interamericano la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5.1 al consagrar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral así como en su artículo 5.2 en el que precisa que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

42.- De igual manera, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 9.1, prevé el derecho a la seguridad personal, y 10.1, establece que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5.1 determina que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psiquiátrica y moral.

43.- De manera tal, que los agentes de la Policía Estatal Única, omitieron observar las disposiciones relacionadas con tales derechos, previstas en los instrumentos jurídicos internacionales, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación a las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se describe en los subsiguientes párrafos.

44.- Concluyendo entonces, que todo ser humano que se encuentre sometido a cualquier forma de detención, retención o prisión, tiene derecho a ser tratado con irrestricto respeto a la dignidad inherente al ser humano, y a que se respete y garantice su vida e integridad física, tal como lo dispone el Conjunto de Principios para la Protección de Personas sometidas a cualquier forma de Detención, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución del día 9 de diciembre de 1988, así como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2008, que define la privación de la libertad como; *“cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa”*.

45.- En ese sentido, es importante mencionar que la Tortura, además de investigarse como violación a los derechos humanos, debe ser investigada como delito, lo que encuentra sustento en la siguiente Tesis Aislada TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS

HUMANOS COMO DE DELITO². Esto en el sentido de que este Organismo debe determinar sobre la violación a los derechos humanos de los impetrantes, con independencia de la carpeta de investigación número “Y” que al respecto se inició.

46.- Investigación, en la que deberá atender lo establecido en el artículo 4, de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado, sin perjuicio a lo establecido en el artículo 21 del Código Penal del Estado, se deberá investigar a: *“los servidores públicos que la ordenen, instiguen, compelan o induzcan, o pudiendo impedirla, no lo hagan; Los terceros instigados o autorizados implícita o explícitamente por alguno de los servidores públicos señalados en los incisos anteriores, y Quienes participen en la comisión del delito de tortura, ya sea en su planeación, ejecución, consentimiento o encubrimiento”*.

47.- Ahora bien, con relación a los hechos contenidos en la carpeta de investigación “W” presentada por “U” en representación de “D”, se solicitó información a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito sobre el estado que guarda la misma, desprendiéndose de la respuesta de fecha 18 de diciembre de 2015 que en fecha 25 de noviembre del año 2013, se dio inicio a la carpeta de investigación “W”; que se giraron diversos oficios a fin de realizar las diligencias consistentes en asegurar las cámaras de video de los establecimientos donde se realizaron los cargos, que se realizaron las diligencias con la finalidad de determinar la identidad de las personas involucradas y que la carpeta se encuentra en trámite, sin precisar la fecha de la última actuación que se tenía hasta ese momento.

48.- La representación social tiene la obligación de investigar y perseguir los delitos, dicha obligación se encuentra preceptuada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no hacerlo transgrede los derechos de legalidad y seguridad jurídica que consagra el artículo 17 Constitucional en su segundo párrafo.

49.- Resultan aplicables al caso bajo análisis las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas, que en sus numerales 11 y 12 establecen que los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la investigación de los delitos y la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, además, que deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

50.- Por lo anterior, al no contar con datos precisos sobre los avances que existen en relación a la carpeta de investigación “W” donde aparece como víctima “D”, es necesario se lleve a cabo una revisión al respecto y se requiera a la representación social para que agilice la investigación de la misma en aras de garantizar el derecho a la procuración de justicia.

---

² Época: Décima Época, Registro: 2006484, Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVI/2014 (10a.) Página: 562.

51.- Atendiendo a los razonamientos y consideraciones anteriormente desarrolladas, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprenden evidencias suficientes para considerar violación a los derechos humanos de “**C**” y “**D**” en la modalidad de tortura.

52.- Por lo anteriormente fundado y motivado, en relación con lo dispuesto por los artículos 1, 102 apartado B y 109 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 apartados A y B, y 178 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 42, 44 y 45 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esta Comisión emite las siguientes:

IV.- RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- A Usted **Lic. Jorge Enrique González Nicolás, Fiscal General del Estado**, gire sus instrucciones a efecto de que se instaure procedimiento dilucidatorio de responsabilidades, en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos referidos, en el que se tomen en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución y en su caso se impongan las sanciones y lo referente a la reparación del daño, que correspondan.

SEGUNDA.- Se integre debidamente la carpeta de investigación identificada bajo el número “**Y**” en la que aparecen como víctimas “**C**” y “**D**” de una manera inmediata y eficaz a efecto de que se esclarezcan los hechos constitutivos del delito de tortura garantizando en todo momento la seguridad de los impetrantes.

TERCERA.- Se agilicen las diligencias que correspondan en la carpeta de investigación identificada bajo el número “**W**” en la que aparece como víctima “**D**” por el delito que corresponda.

CUARTA.- A usted mismo, para que dentro de las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de hechos como los aquí denunciados, a tal efecto se valore la necesidad de la elaboración de un protocolo que permita garantizar la protección de la integridad de las personas desde el momento de su detención hasta la puesta a disposición del Juez de Control.

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y con tal carácter se publica en la Gaceta de este organismo, y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares; por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstos, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los derechos humanos.

En todo caso, una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate, informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta. Entregará en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada. En caso de que se opte por no aceptar la presente recomendación, le solicito en los términos del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que funde, motive y haga pública su negativa.

No dudando de su buena disposición para que la presente sea aceptada y cumplida.

A T E N T A M E N T E

**M.D.H. JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ
P R E S I D E N T E**

c.c.p. Quejoso, para su conocimiento.
c.c.p. Lic. José Alarcón Ornelas, Secretario Técnico y Ejecutivo de la CEDH.